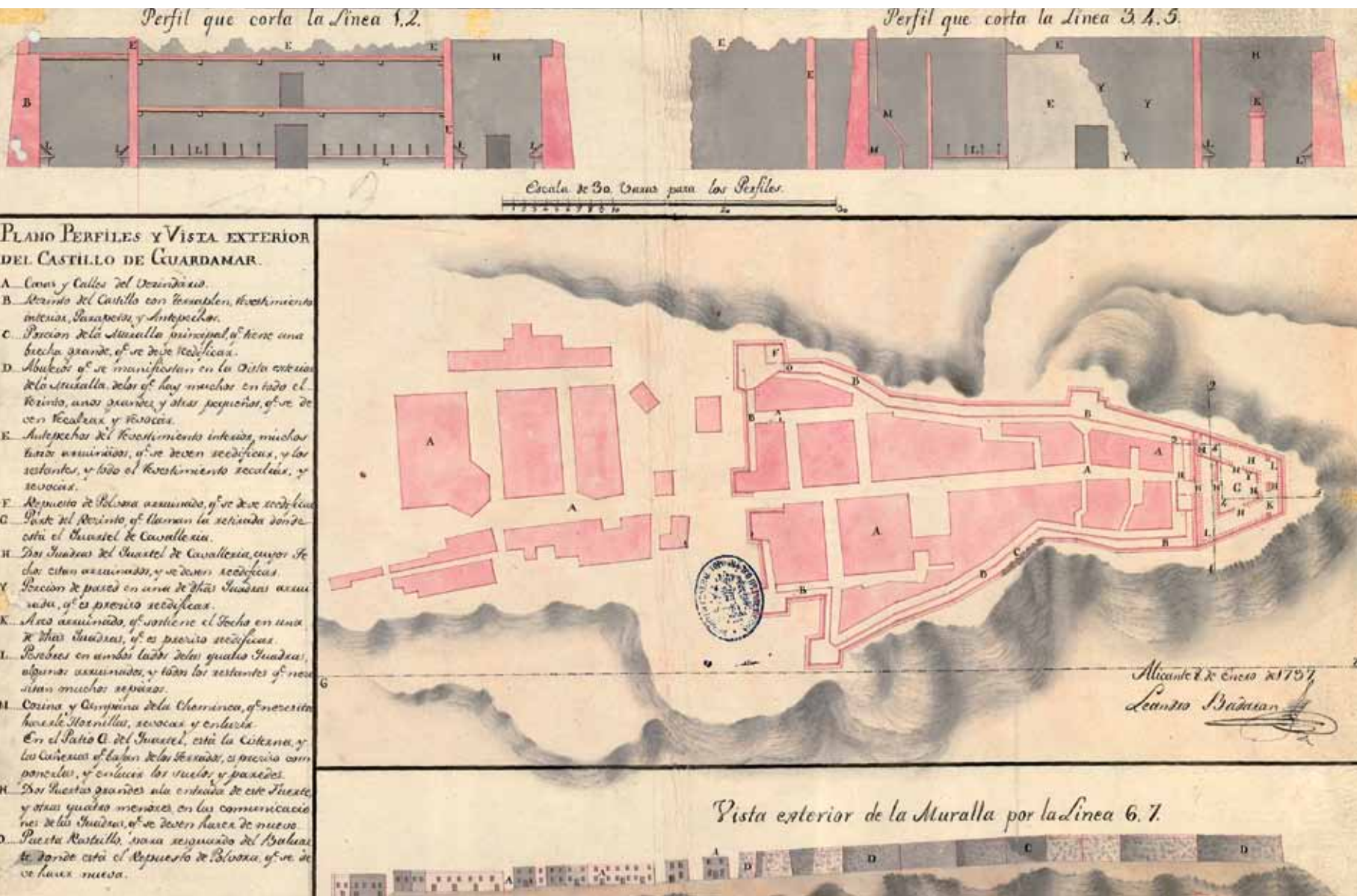


GUARDAMAR EN LA EDAD MODERNA (*)

(*) Este trabajo ha sido realizado en el marco del Proyecto de Investigación HUM2007-63505, financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia.



"Plano, Perfiles
y Vista Exterior
del Castillo de
Guardamar", 1737

A comienzos de la edad moderna, Guardamar continuaba siendo una aldea realenga vinculada a la ciudad de Orihuela; aunque los lazos de dependencia institucional eran mucho más débiles que los que mantenían otras poblaciones también insertas en el término general de la capital del Segura, como eran los casos de Almoradí, Catral y Callosa. A diferencia de éstas, Guardamar tenía su propio consistorio, integrado por oficiales que gozaban de plena capacidad decisoria y que, con la excepción de la máxima autoridad local –encarnada en la figura del Justicia–, eran elegidos anualmente de forma autónoma. El Justicia, en efecto, ejercía en calidad de lugarteniente del de Orihuela, a quien debía su nombramiento, y en cuyo nombre ejercía la jurisdicción. Pero esta situación de dependencia no se extendía a los jurados –auténtico órgano rector del municipio–, ni al consell o asamblea vecinal que le asesoraba en las decisiones importantes. También el sobrecequero o juez de aguas y el almotacén, que tenía a su cargo el control del sistema de pesas y medidas y la vigilancia del mercado, eran oficiales independientes; al igual que el clavario, que se ocupaba de llevar cuenta y razón de los movimientos –ingresos y gastos– de la hacienda local; el síndico, el escribano y el cambrer o administrador de la cámara de granos.

A lo largo del período moderno, la peculiar inserción de Guardamar en el ámbito del término general de la ciudad de Orihuela –comparable, en el contexto valenciano, al caso de Monforte de Cid con respecto a Alicante; y de Sagunto respecto a Valencia– habría de experimentar, no obstante, modificaciones de relieve. Por un lado, ha de advertirse que su término particular incluía el caserío de Rojales; pero también tres grandes heredades que, con el tiempo, generaron una dinámica poblacional propia auspiciada por sus respectivos propietarios; los cuales, mediante el establecimiento de colonos en sus dominios, los convirtieron en señoríos alfonsinos. La colonización de las heredades de Benijófar, en 1689; Formentera, en 1691; y Daya Vieja, en 1791, supuso, en consecuencia, la aparición de nuevas poblaciones sujetas a la jurisdicción de sus respectivos señores en lo que tradicionalmente había sido meros patrimonios privados ubicados en el término particular de Guardamar (BERNABÉ, 1993).

ARCHIVOS CITADOS

ACA: CA: Archivo de la Corona de Aragón: Consejo de Aragón

AMG: Archivo Municipal de Guardamar

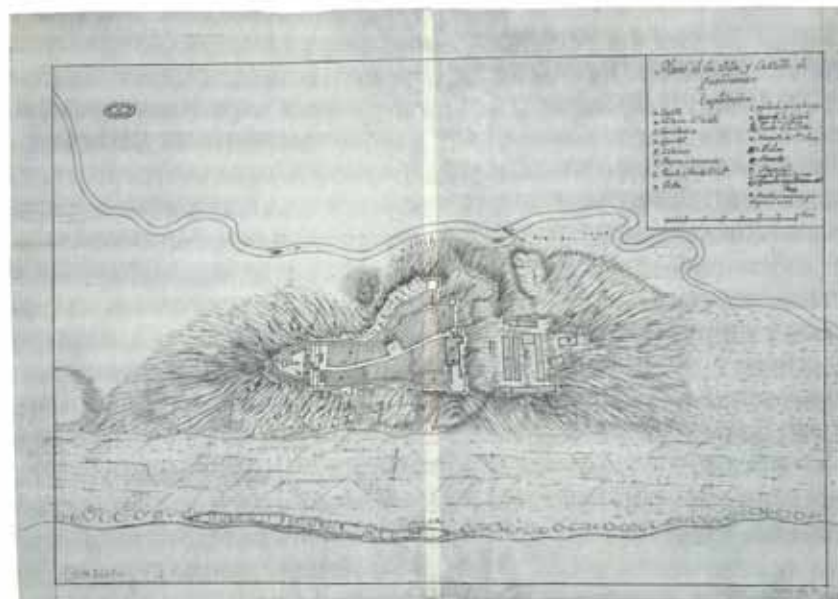
AMO: Archivo Municipal de Orihuela

ARV: Archivo del Reino de Valencia

"Plano de la Villa y Castillo de Guardamar". Archivo General de Simancas, MPD, 46, 11.

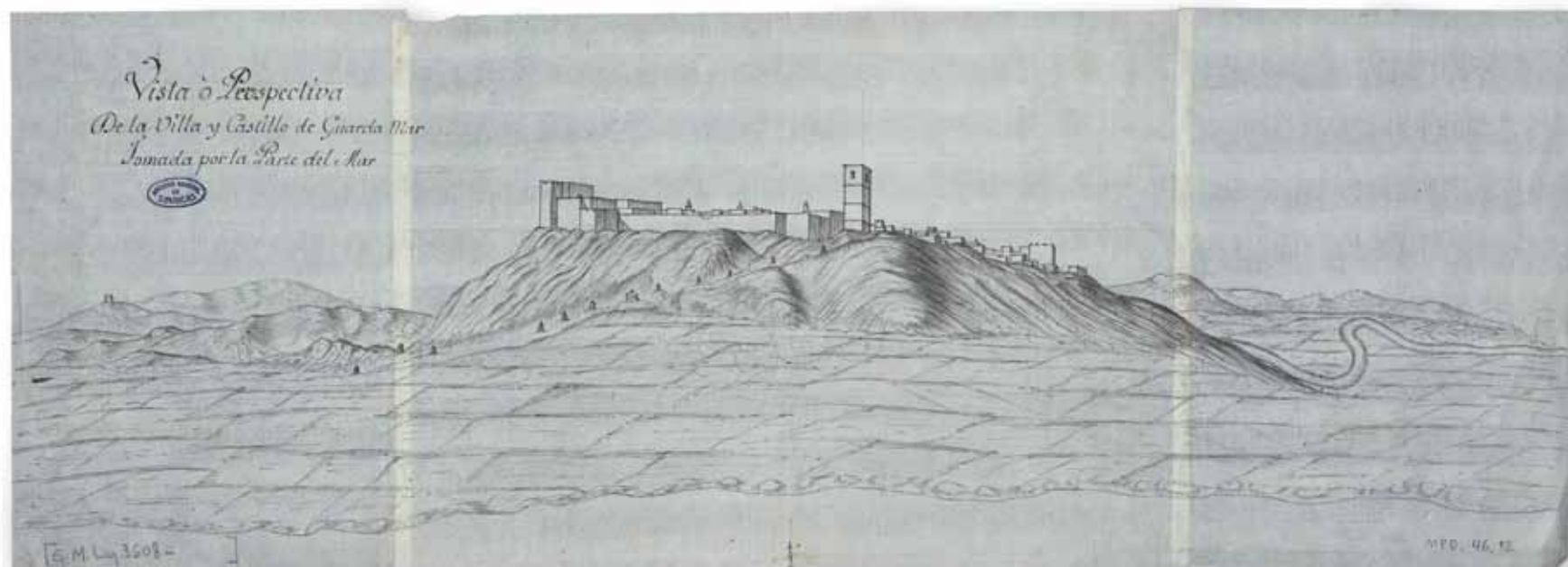
de su Justicia ejercer allí jurisdicción (Almunia, p. 306). Y un episodio parecido debió producirse décadas más tarde, pues en 1613 una sentencia de la Audiencia de Valencia declaró en favor de Guardamar la incapacidad del Subdelegado del Justicia de Orihuela para hacer valer allí su jurisdicción, ya que ésta correspondía al lugarteniente ordinario que había sido nombrado a tal efecto y que –como era norma– recaía en un vecino del lugar (Tagell, let. I, nº 111)

En 1629 fue un episodio de desacato lo que movió a las autoridades oriolanas a tomar cartas en el asunto para denunciar la actitud de algunos ediles de Guardamar (AMO: Contestador de 1629, ff. 96v-97v). Y a finales de 1651 éstos plantearon ya abiertamente el objetivo de la emancipación, al ofrecer a la Corona un servicio en metálico de 12.000 reales de plata a cambio del privilegio de villa o de universidad separada. El informe del Virrey, solicitado desde Madrid, resultó desfavorable sin embargo a las pretensiones de Guardamar, al tomar en consideración las alegaciones contrarias expresadas por Orihuela (AMO: Nº 1248, ff. 538-540; Contestador de 1652, ff. 428, 432; ACA: CA: Leg. 731, doc. 76). La idea de la segregación, no obstante, estaba calando ya lo suficiente entre el vecindario como para animarle a no desfallecer ante este tipo de contratiempos. En 1664 se iniciaba nuevo pleito al respecto (ARV: Real Audiencia. Procesos, 3ª parte, exp. 2456); y, como la sentencia fuera nuevamente adversa, en 1666 el embajador de Orihuela en la corte alertaba con preocupación que Guardamar estaba ofreciendo ya 18.000 o 20.000 reales por el ansiado privilegio de villazgo; y que el Consejo de Aragón empezaba a tomar en serio la propuesta. Orihuela debía prepararse para servir al Rey con una cantidad importante e intensificar la actividad diplomática en el entorno cortesano si no quería asistir a la segregación de Guardamar (AMO: Contestador de



1666, ff. 212-213v, 223, 225, 226-226v; Contestador de 1667, f. 182; Provisiones Reales, 1569-1690, ff. 284 y ss).

Tampoco en esta ocasión obtuvo ésta el fruto apetecido, al conseguir la ciudad que el asunto se tratara en el Consejo por la vía de justicia, en lugar de resolverse por la de gracia o gobierno, que resultaba más proclive al intercambio de servicios por mercedes y, en consecuencia, facilitaba las pretensiones de Guardamar. Las acciones ante los tribunales proseguían, no obstante, en 1672 (Martínez Teva-García Amorós, 1992). Y en 1684, ante los muy fundados indicios de que Guardamar volvía nuevamente a la carga, en instrucciones enviadas por Orihuela a su síndico en la corte se le indicaban los documentos que debía mostrar para contrarrestar las pretensiones de villazgo (AMO: Contestador de 1684, ff. 185v-186). Las gestiones reemprendidas cinco años más tarde por Guardamar habrían de resultar, sin embargo, ya definitivas. El 14 de diciembre de 1689 el Virrey de Valencia recibió ya comunicación oficial de que la decisión real era irreversible, a falta solamente de concretar la cuantía del servicio monetario, que quedó establecido finalmente en 40.000 reales. Cuando Orihuela reaccionó, era ya demasiado tarde; aunque el privilegio acreditativo aun tardaría más de dos años y medio en ser expedido (ACA: CA: Leg. 630, doc. 68/1-42).



"Vista ó Perspectiva de la Villa y Castillo de Guardamar tomada por la Parte del Mar". Archivo General de Simancas, MPD, 46, 12.

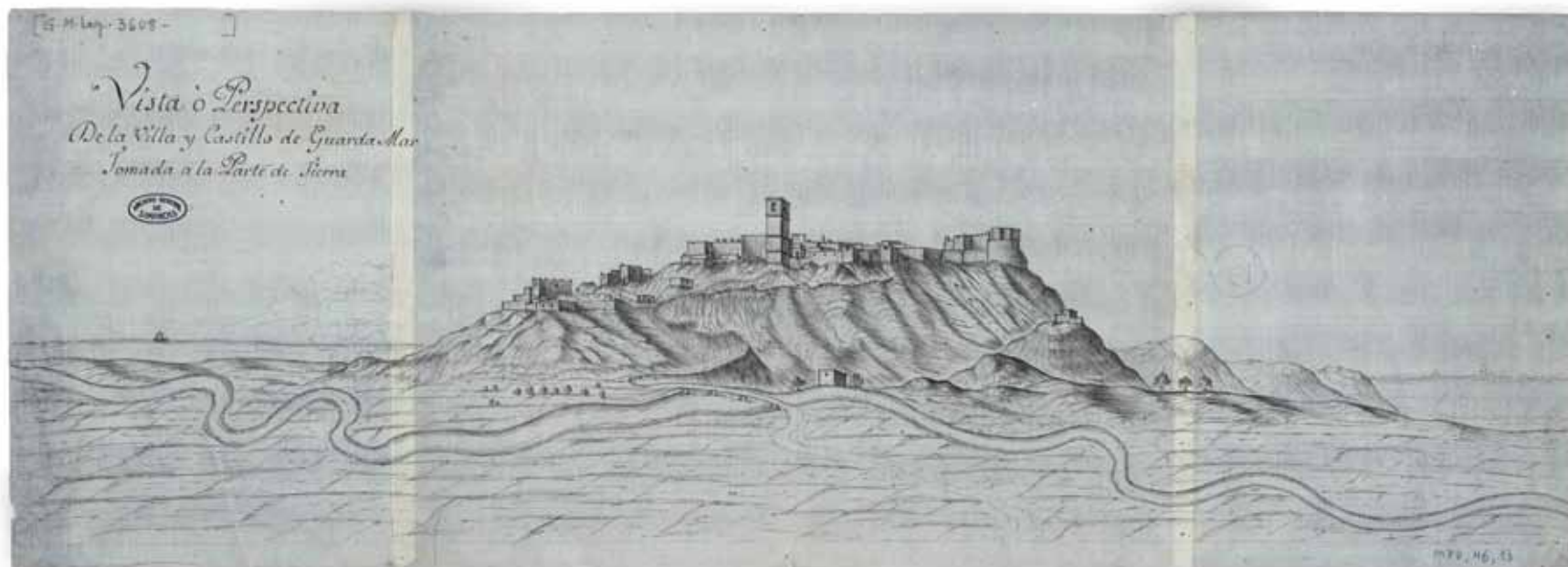
Con la obtención del privilegio de villazgo, el 29 de agosto de 1692, Guardamar alcanzaba el objetivo largamente perseguido, pues además de la confirmación de una serie de facultades de que ya venía gozando hasta el momento – como la exención fiscal respecto de Orihuela, la delimitación territorial expresa, la dotación de boalar o dehesa de pastos para el abastecedor de las carnes, la existencia de bayle –, conseguía el ejercicio independiente de la jurisdicción encarnada por el Justicia, que dejaba de estar supeditado al de Orihuela, y el derecho a estar representada en las cortes valencianas y en la Diputación de la Generalidad del reino de Valencia. Se inauguraba de este modo una nueva etapa en la historia de la localidad, como municipio independiente; sin que las protestas oriolanas subsiguientes consiguieran que se revocase ni una sola de las mercedes otorgadas (Martínez Teva-García Amorós, 1992).

Pero, reeditando en cierto modo la experiencia emancipadora que se acaba de resumir, también los habitantes de Rojales protagonizaron décadas más tarde un movimiento parecido para segregarse de la villa de Guardamar. Era Rojales un caserío dependiente, inserto en su término particular, donde venían residiendo, a lo largo de

los siglos XVI y XVII, entre una y dos decenas de familias de pequeños labradores, enfiteutas y jornaleros, incapaces de generar un núcleo poblacional estable. A medida que fue dejándose sentir la expansión del Setecientos, la aldea fue creciendo y, con ello, comenzaron a arraigar los deseos de independencia. A mitad de la centuria, cuando el número de casas ya se aproximaba al centenar, se iniciaron los primeros movimientos segregacionistas, que habrían de culminar en 1778 con la consecución del correspondiente privilegio de villazgo (Álvarez, 1998; González-Picatoste, 2005). Además de la pérdida del control jurisdiccional y fiscal sobre la población residente en Rojales, la amputación experimentada por Guardamar en su término municipal supuso una importante pérdida, toda vez que una buena parte de la huerta irrigada por las acequias que tomaban agua del azud de Rojales – fundamentalmente en sus tramos superiores – fue asignada a la nueva villa.

* * *

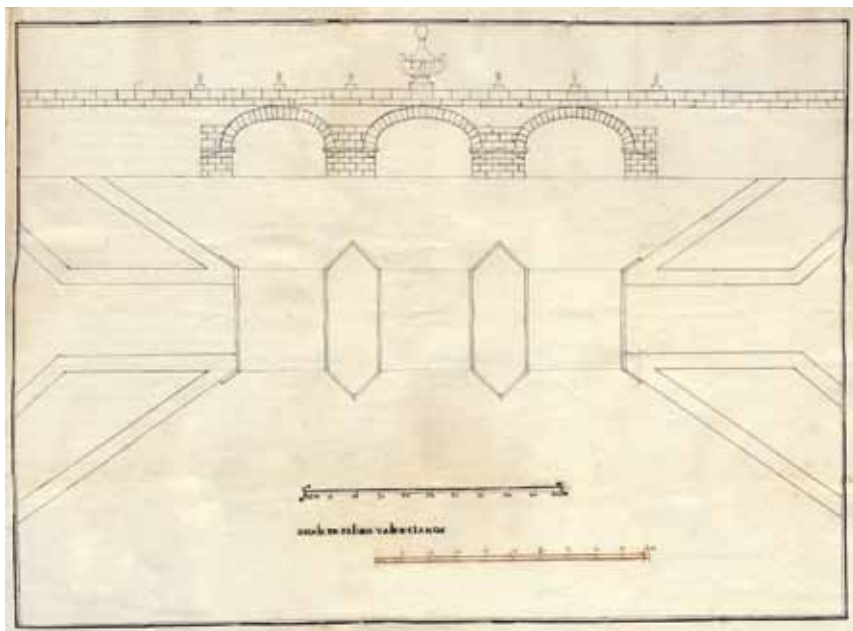
Con todo, el crecimiento poblacional experimentado por Rojales, que desembocó en su erección como entidad



municipal independiente, fue superado siempre por el municipio matriz. Ya en los albores de la modernidad había sido Guardamar una pequeña aldea que no alcanzaba el centenar de casas –95 en 1510–, mientras que el caserío de Rojales apenas superaba la docena. Dejando ya a un lado la trayectoria histórica de esta pequeña aldea, la evolución demográfica experimentada por los residentes en Guardamar a lo largo del siglo XVI apunta a un importante crecimiento, que es común a todo el reino de Valencia; pero que aun tardaría varias décadas en dejarse sentir con plenitud. Más que la inestabilidad social y política subsiguiente al movimiento de las Germanías –desarrollado en 1520, con indudable eco entre el vecindario–, fue esencialmente el peligro omnipresente de la piratería berberisca, junto a las dificultades para rentabilizar adecuadamente la agricultura comercial, los elementos que más contribuyeron a mantener los efectivos poblacionales por debajo del centenar de vecinos; al menos, hasta mediados del Quinientos, en que comienzan a despegar con ímpetu, al tiempo que se mejora el estado y capacidad defensiva de las fortificaciones litorales. En la década de 1570 se habían sobrepasado ya las 130 casas en el casco urbano; y, a finales de la centuria, se estaba a punto de alcanzar el centenar y medio.

Pero esta tendencia al crecimiento no habría de sostenerse durante mucho tiempo, de modo que durante la primera mitad del siglo XVII se asiste a una clara regresión, inducida por factores aun no suficientemente claros. La expulsión de los moriscos, decretada en 1609, no parece que contribuyera de forma significativa; a no ser que fueran varias las familias que marcharan a otras tierras –no demasiado lejanas– a ocupar el vacío generado por dicho extrañamiento, pues en Guardamar no llegó a residir ni un solo “seguidor de la secta de Mahoma”. Mayor incidencia debió tener la aparición de crecientes dificultades de financiación en algunas modestas inversiones ensayadas en el sector agrario, que, junto a una inusual sucesión de malas cosechas, arrastraron al endeudamiento a la comunidad de regantes y ocasionaron la ruina de varias familias campesinas. Las continuas levadas para las guerras con Francia tampoco contribuyeron precisamente a la recuperación demográfica; de modo que el vecindario de 1646 registra todavía unos niveles poblacionales algo inferiores a los de medio siglo atrás. La terrible epidemia de peste de 1648, a la que sucedería otra menos mortífera en 1678, con la acentuación de algunos de los problemas ya mencionados, contribuyeron a mantener la población de Guardamar muy

“Vista ó Perspectiva de la Villa y Castillo de Guardamar tomada a la Parte de Tierra”. Archivo General de Simancas, MPD, 46, 13.



Proyecto de puente, 1772

por debajo del centenar de vecinos, a pesar de que en 1661 se informaba de la reciente formación de un arrabal en el que ya residían más de 50 familias (ACA: CA: Leg. 794; doc. 32/2). Habrá que esperar, así, a las últimas décadas de la centuria para entrar en una nueva fase de recuperación (Millán, 1984).

Tras las desestabilizadoras consecuencias de la Guerra de Sucesión, se reemprende la tendencia alcista, lo que permitirá alcanzar los dos centenares de vecinos en la década de 1730, justamente cuando los inicios de la expansión agraria y las nuevas roturaciones y desecaciones practicadas en el entorno actúan como factor de atracción poblacional. La amenaza pirática, por otro lado, era ya pura anécdota; y episodios como el acaecido en 1543, cuando Salah Rais desembarcó con 11 galeras en las proximidades de la desembocadura del Segura (García Martínez, 1972); o como los protagonizados por otras escuadras enemigas en las décadas centrales del siglo XVII, hacía tiempo que habían dejado de preocupar a una población que, poco a

poco, irá perdiendo el miedo al litoral. Todavía hasta bien entrado el siglo XVIII continuó siendo Guardamar el único núcleo habitado de la fachada marítima comprendido entre Alicante y la raya de Castilla, aunque los caseríos que se estaban formando en las proximidades de la fortaleza del cap del Aljup –la futura Santa Pola– y de la torre de cap Cerver –la futura Torrevieja– contribuían a desvanecer esa sensación de aislamiento y soledad que no demasiado tiempo atrás había mantenido paralizadas las perspectivas de ocupación del espacio litoral.

Conforme avanzaba la centuria, también lo hacía el crecimiento demográfico de Guardamar, que en la década de 1760 superaba ya las 400 familias; y que, en una relación nominal de 1774, arroja un total de 543 contribuyentes en el casco urbano, 9 en la huerta y 7 en el campo (AMG: Cabildos de 1774). Algo inferior es la cifra que recoge el censo de Floridablanca, de 1787, aunque poco antes de doblar el siglo se alcanzan ya los 660 vecinos –según Cavanilles–, en una etapa marcada nuevamente por la ralentización y estabilización. En un balance global, es a lo largo del siglo XVIII, por tanto, cuando la villa experimenta el crecimiento más espectacular, llegando a cuadruplicar prácticamente sus efectivos humanos a lo largo de esta centuria. Además de la previsible caída de la mortalidad catastrófica, esta explosión demográfica no era ajena, obviamente, a los progresos experimentados en el sector agrario, que alentaron un incesante movimiento inmigratorio, al compás que permitieron alimentar crecientes contingentes poblacionales. Buena parte de este incremento vecinal se asentó en el arrabal que, desde la segunda mitad del Seiscientos, se había ido formando en los extramuros del antiguo núcleo de origen medieval y que, un siglo más tarde, le llegó a superar (Hurtado, 1994).

El puente y azud de Rojas



CUADRO I
EVOLUCIÓN DEL VECINDARIO DE GUARDAMAR (SIN ROJALES)

Año	Vecinos
1510	95
1513	82
1530	77
1536	75
1542	94
1559	115
1565	120
1572	130
1598	155
1646	67
1712	137
1715	127
1740	290
1764	390
1774	559
1780	590
1794	660

Fuentes: BERNAT-BADENES, 1994 (para 1510, 1572, 1646, 1712, 1794); AMO: Padrones de sal y muro (para 1513, 1530, 1536, 1542, 1559, 1565); HURTADO, 1995b (para 1715, 1740, 1764, 1780);AMG:Capitularde1598-99;Cabildosde1774(para 1598 y 1774, respectivamente)

En las economías agrarias del Antiguo Régimen –como era el caso de Guardamar–, la propiedad de la tierra opera como elemento esencial en la articulación de la actividad productiva y de la organización social; de ahí la conveniencia de atender a la fisonomía que aquella presenta y a su dinámica temporal. La evolución de la superficie irrigada a lo largo de la edad moderna, en la medida en que ha podido ser reconstruida, muestra a grandes rasgos una dinámica que aunque sigue de cerca la experimentada por los efectivos humanos, lo hace en proporciones muy dispares. Utilizaremos para su conocimiento en una primera etapa dos padrones de regantes confeccionados en 1535 y 1610, que nos permite aproximarnos a la huerta irrigada por las acequias que tomaban agua del azud de Rojas (AMO: N° 1.248 y N° 76). Puesto que en esa época no había distinción entre los términos de Guardamar y Rojas, que formaban una comunidad de riegos indiferenciada, se procederá a un análisis conjunto, con la sola exclusión de las tres grandes heredades ya mencionadas –Daya Vieja, Formentera y Benijófar– que, en los dos primeros casos, también pertenecían a la misma comunidad de regantes y cuyo término propio sí es posible aislar a estos efectos.

Un primer elemento a destacar es la modesta ampliación –en torno a un 10%– que experimenta el perímetro irrigado a lo largo del Quinientos, como consecuencia, seguramente, de algunas pequeñas desecaciones y roturaciones llevadas



Observaciones sobre la historia natural del Reyno de Valencia, de Antonio Josef Cavanilles

a cabo en los límites con el almarjal y el saladar, fronteras siempre imprecisas y variables, al compás de las cambiantes coyunturas. Será durante la primera mitad del siglo XVIII, sin embargo, cuando se produzca la gran expansión que reflejan los datos de 1830. El número de propietarios también se incrementó durante el primer período considerado –a falta de otros datos para etapas posteriores– en una significativa proporción; pero ello no impidió que una buena parte del vecindario aun permaneciera excluido de aquella condición. Casi la mitad de la población de Guardamar no llegó a poseer tierras en la huerta a lo largo del siglo XVI, mientras que, por otro lado, destacados miembros de la nobleza oriolana y algunos propietarios más modestos residentes en la vecina Almoradí acumulaban una buena parte de la tierra.

CUADRO II
EXTENSIÓN DE LA HUERTA DE GUARDAMAR-ROJALES (EN TAHÚLLAS)

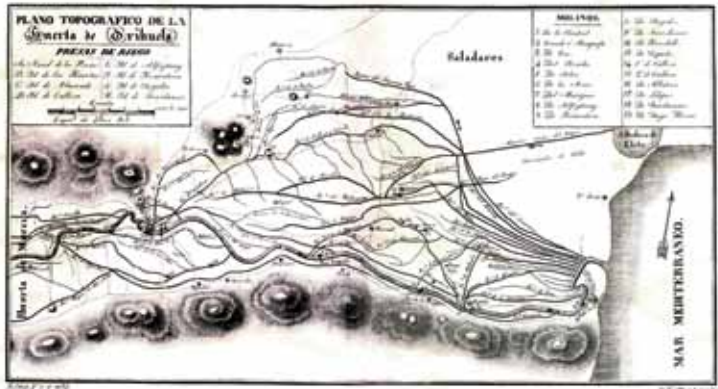
Acequia	1535	1610	1830
La Bernada-Alquibla	510	705	756
Los Huertos	1.915	2.646	3.044
La Alcudia	2.418	2.731	4.933
Azarbe la Reina	750	---	---
Terres Noves	---	50	---
Comuna y otras	---	---	2.052
TOTAL	5.593	6.132	10.795

Fuentes: AMO: N° 1.248 y N° 76 (para 1535 y 1610) y ROCA DE TOGORES ,1832 (para 1830). Elaboración propia

La distribución de la propiedad –expresada en los cuadros III y IV– muestra un elevado grado de concentración, ya apreciable a principios de la edad moderna, y que llegará a intensificarse con el transcurso del tiempo. En 1535, los poseedores de extensiones superiores a las 200 tahúllas son solo siete, pero acumulan casi la mitad de la huerta. Tres generaciones más tarde, este grupo selecto de grandes hacendados se ha incrementado en dos miembros más, pero ahora controlan ya las dos terceras partes del regadío.

En el otro extremo, el grupo de los medianos propietarios, con extensiones comprendidas entre 26 y 100 tahúllas, que en 1535 representaban más del 40 por ciento del total, ha asistido a un proceso de fragmentación y subdivisión de sus posesiones; de modo que en 1610 ha perdido bastante protagonismo, a costa del pequeño labrador, que ahora predomina numéricamente. Los sucesivos repartos entre herederos y los efectos de las compra-ventas de tierras han polarizado la estructura social agraria y posiblemente han contribuido a intensificar el proceso de penetración del capital comarcal foráneo. La presencia de destacados linajes oriolanos, como los Masquefa, Rocamora, Soler, ya se detecta en el grupo de grandes propietarios en 1535; y a principios del XVII se han añadido los Rocafull, Sanchez, Gil, Torner. Muchos de ellos tienen sus grandes heredades en la acequia de la Alcudía, seguramente en las fronteras con el almarjal. De dimensiones más reducidas eran las poseídas por algunos vecinos de Almoradí, que, sin embargo, llegaron a contar con 18 representantes en la comunidad de regantes en 1573 (ARV: Real Audiencia. Procesos, parte 1ª, S/318).

“Plano Topográfico de la Huerta de Orihuela. Presas de riego”. 1832



CUADRO III

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA HUERTA DE GUARDAMAR-ROJALES EN 1535

Tahúllas	Nº Prop.	%	Nº Thas	%
0-10	4	7.7	31	0.6
11-25	9	17.3	149	2.7
26-50	8	15.4	311	5.6
51-100	14	26.9	952	16.9
101-200	10	19.2	1.502	26.9
+200	7	13.5	2.648	47.3
TOTAL	52	100	5.593	100

Fuente: AMO: Nº 1.248. Elaboración propia.

CUADRO IV

DISTRIBUCIÓN DE LA PROPIEDAD DE LA HUERTA DE GUARDAMAR-ROJALES EN 1610

Tahúllas	Nº Prop.	%	Nº Thas	%
0-10	4	7.7	31	0.6
11-25	9	17.3	149	2.7
26-50	8	15.4	311	5.6
51-100	14	26.9	952	16.9
101-200	10	19.2	1.502	26.9
+200	7	13.5	2.648	47.3
TOTAL	52	100	5.593	100

Fuente: AMO: Nº 76. Elaboración propia.

Mas no siempre el tamaño de las explotaciones es un fiel indicativo del grado de solvencia económica de sus propietarios. En la recaudación de una derrama impuesta sobre los regantes en 1608, el colector no consiguió cobrar a un total de 20 propietarios, que acumulaban un total de 819 tahúllas, calificadas como “perdidas”. Durante esos años de cambio de coyuntura fueron varias las contribuciones extraordinarias que tuvo que aplicar la comunidad de regantes, tanto para hacer frente a algunas obras costosas pero inexcusables, como la reparación del azud de Rojales –destruido por una avenida del Segura–, que ocasionó un endeudamiento superior a las 3.000 libras, como para financiar un pleito contra la ciudad de Murcia por la elevación del azud de la Contraparada (AMO: Sobrequeir, 1532-1657). En estas ocasiones era habitual que muchos regantes se resistieran o se eximieran de contribuir, bajo diversas argucias legales, incrementando el endeudamiento acumulado por la comunidad y, en definitiva, las cuotas a repartir para hacerle frente. En 1622, las hermanas Isabel y Leonor Masquefa habían dejado de satisfacer a la comunidad de regantes 1.500 libras –equivalentes aproximadamente al valor de unas 100 tahúllas de tierra blanca– por 7 derramas impagadas, correspondientes a un total de 550 tahúllas y un molino que poseían en Rojales. Y no menos fácil resultaba hacer pagar a los poseedores de Daya Vieja y Formentera, que acumulaban cerca de 2.000 tahúllas entre los dos (AMO: Nº 73 y nº 76). Ante el agobiante peso de las deudas, el abandono de las tierras menos productivas tampoco fue excepcional a lo largo de buena parte del Seiscientos, en una coyuntura marcada por el incremento de los costes y por las crecientes dificultades para rentabilizar la agricultura comercial, debidas en buena parte a la contracción de la demanda efectiva (Bernabé, 1981).



Escudilla de orejetas de
loza dorada, procedente del
Castillo de Guardamar. Museo
Arqueológico de Guardamar

Indicios dispersos apuntan hacia una dinámica de recuperación agraria en las últimas décadas del siglo XVII (Millán, 1984; Canales, 1988); pero habrá que esperar a la finalización de la Guerra de Sucesión y, sobre todo, a la puesta en marcha de una doble empresa colonizadora dirigida, respectivamente, por el ayuntamiento de Guardamar y por el Cardenal D. Luis Belluga, para asistir al despegue definitivo de la huerta. La bonificación de los almarjales y saladares que bordeaban la zona norte y las roturaciones de secanos a partir de la década de 1720 permitió extender el cultivo, en gran medida a costa de ceder a las Pías Fundaciones un total cercano a las 13.000 tahúllas en ese ámbito, que, hasta el momento, habían permanecido infructíferas, y que ahora constituirían la base territorial del nuevo municipio de San Fulgencio (León, 1962-63; Millán, 1984; Canales-Vera, 1985; Hurtado, 1994). El ayuntamiento de Guardamar, que ya en la etapa foral había concedido algunos lotes de tierras infructíferas a los vecinos que las solicitaran, con el compromiso de reducirlas a cultivo –bajo pena de perderlas–, intensificó dicha práctica a lo largo del siglo XVIII, y acabó recibiendo de la Corona en 1771 el respaldo necesario para continuarla, aunque ahora vigilada por los representantes del Real Patrimonio. La colonización municipal se realizaba mediante la cesión de lotes en enfiteusis, que convertía a los beneficiarios en dueños del dominio útil de la tierra, a cambio de un pequeño censo anual. La remodelación de la red hidráulica, con la apertura de nuevos canales que facilitaron el avenamiento –como el azarbe del Señor– y mejoraron la distribución de las aguas de riego, propició una considerable extensión del cultivo, que favoreció el acceso a la condición de propietario, la ampliación de algunos patrimonios y, en definitiva, el fuerte crecimiento demográfico experimentado a lo largo de la centuria (Hurtado, 1994, 1998).

La expansión agraria del Setecientos acentuó seguramente algunas tendencias ya observadas en la dinámica social de épocas anteriores. El protagonismo de la propiedad forastera, por ejemplo, continuaba siendo importante a la altura de 1735, en que fue valorada en 39.720 libras, frente a las 18.317 en que se estimó la poseída por el vecindario –incluido Rojales (Camarena, 1966). Pero esta presencia foránea quizás fuera disminuyendo progresivamente, al menos en el término de Guardamar –no tanto en el de Rojales, donde el número de propietarios forasteros llegó a ser justamente el doble–. Así se deduce de las relativamente modestas cantidades asignadas a los 44 terratenientes contabilizados en la primera villa –frente a los 88 de la segunda– para la recaudación del impuesto del equivalente de 1774. Esta misma fuente fiscal evidencia, asimismo, la persistencia de una intensa diferenciación social interna en el municipio, ya que –aun teniendo en cuenta que no se trataba aquél de un impuesto enteramente proporcional a la riqueza– el 10 por ciento del vecindario aportaba más del 40 por ciento de la recaudación total (AMG: Cabildos de 1774).

Entre los cultivos que protagonizaron la expansión agraria parecen destacar las hortalizas y los frutícolas y, en menor medida, el cereal, que resultaba frecuentemente deficitario. Los datos sobre la navegación de cabotaje practicada a lo largo de la segunda mitad del siglo XVIII y primer lustro del XIX entre Guardamar y el puerto de Alicante revelan la masiva presencia del melón, los cítricos y las legumbres, además de la barrilla –recolectada en los montes de entorno y destinada a la industria jabonera– en los 420 viajes computados. Los menores costes unitarios del transporte marítimo en comparación con el terrestre y el auge de la actividad mercantil alicantina favorecieron la salida



Guardamar y el río
Segura, h. 1900

de las cosechas locales, que ampliaron significativamente su demanda exterior (Hurtado, 1995a). El comercio litoral, practicado en su mayor parte desde las inmediaciones de la torre del Cargador –frente al paraje del Moncayo (García Menárguez, 1999),– gozaba ya de cierta tradición, pues a lo largo del siglo XVI fueron 84 las embarcaciones que atracaron en el puerto de Valencia procedentes de Guardamar (Salvador, 1973). La inexistencia aun de puertos habilitados para el comercio exterior en las cercanías, como los futuros de Torre Vieja y Santa Pola –cuya viabilidad venía siendo bloqueada por la férrea defensa alicantina de su tradicional monopolio, frente a las pretensiones oriolanas e ilicitanas, respectivamente (Subira, 1987; Bernabé, 2009)–, debió contribuir a mantener esta actividad por el único núcleo habitado del litoral sureño.

* * *

El crecimiento experimentado a lo largo de buena parte del XVIII tiene sus raíces, como ya se ha dicho, en el cambio de coyuntura producido a finales del XVII; de modo que solo parcialmente puede atribuirse a los efectos de las nuevas directrices que en el terreno político-administrativo

pudo introducir la nueva dinastía borbónica, incluidas las concernientes a la organización municipal. Durante la etapa foral moderna, y al margen de su dependencia jurisdiccional con respecto a la ciudad de Orihuela, Guardamar dispuso de una amplia autonomía de gestión en la esfera local, tanto en lo que se refiere a la provisión de los cargos consistoriales, como en lo concerniente a la configuración de su hacienda municipal. Desde 1507 el acceso a los oficios municipales se regía por el procedimiento denominado de la insaculación, consistente en el sorteo anual de dichos cargos de entre los candidatos cuyos nombres eran introducidos en una bolsa o sacopreviamente constituida. Para acceder a la condición de candidato o insaculado se exigían unos requisitos mínimos de carácter personal y patrimonial, seguramente al alcance de la mayor parte de los cabezas de familia. Las primeras listas electorales eran confeccionadas generalmente por destacados agentes regioes; y, una vez alcanzada, la condición de insaculado era vitalicia. Para reponer las bajas que se fueran produciendo –por fallecimiento, senectud o desavecindamiento–, periódicamente se reponían las bolsas mediante la graduación o habilitación de nuevos aspirantes, por parte de una comisión integrada por miembros del consistorio.

Escudilla procedente del Castillo
de Guardamar. S. XVI-XVII



Durante la revuelta de las Germanías –desarrollada entre 1519 y 1521 en buena parte del reino de Valencia, incluída la ciudad de Orihuela, donde alcanzó especial virulencia–, fueron destruidas las bolsas de la insaculación en Guardamar; pero el sistema fue nuevamente repuesto en 1527, mediante privilegio expreso. Desde entonces y hasta su extinción con los decretos de Nueva Planta, en 1707, el modelo insaculatorio se caracteriza en Guardamar por la existencia de una bolsa única de candidatos para cubrir por sorteo anual todos los oficios consistoriales, cuyo número fluctuó en torno a la veintena, hasta que, con la obtención del privilegio de villazgo, en 1693, se incrementa a treinta. Puesto que casi todos los candidatos que no habían sido agraciados por la suerte ocupaban ese año un escaño en el consell municipal –integrado por 12 miembros– y estaba prohibido ejercer oficios dos años seguidos, en la práctica el procedimiento se asemejaba bastante a un sistema rotatorio; en buena parte controlado, además, por un grupo reducido de familias (BERNABÉ, 1999).

En su trayectoria a largo plazo, la dinámica insaculatoria revela una tendencia a la continuidad de una serie de apellidos –los Aldeguer, Menarques, García, Ortiz– al frente del poder municipal, que no excluyó ciertas dosis de renovación, especialmente a medida que nos aproximamos a finales de la centuria y, muy especialmente, al incrementarse a 30 el número de insaculados. Mas no parece que esa especie de oligarquía municipal se asemejara siempre y necesariamente a la élite económica del municipio, pues –al menos a principios del siglo XVII– entre los insaculados figuraban regantes de diversa consideración, con un claro predominio del grupo de la medianos propietarios. Junto a la explotación de un patrimonio agrario más o menos extenso, la participación

en algunas actividades potencialmente lucrativas ligadas a la hacienda municipal, como el arrendamiento de la percepción de ciertos arbitrios o la administración de algunos abastecimientos, complementaban su economía familiar.

La precariedad de la hacienda municipal durante el siglo XVII, no obstante, limitaba las posibilidades de enriquecimiento mediante la participación en su gestión. En las décadas iniciales de aquella centuria las arcas municipales se nutrían de los ingresos proporcionados por mediación de renta: la sisa mayor, que –a modo de sobreprecio– recaía sobre el consumo de alimentos básicos; la treta o derecho de saca de determinados productos –cereal y pescado, pero también barrilla y regalicia–; la romana –o derecho de peso–; la tienda y la taberna –explotadas en régimen de estanco o monopolio–; la recolección de la sosa de los saladares y de las inmediateces del azarbe de la Reina. A todo ello se añadía el precio de arrendamiento de los pastos del campo, cuyo dominio ostentaba el Real Patrimonio, aunque solía cederlo temporalmente al municipio, por periodos de cuatro o diez años, frecuentemente renovados, para atender las necesidades del gasto. Contando esta última partida –cuyo importe superaba habitualmente las 100 libras–, a principios del siglo XVII la renta conjunta de todas ellas solía oscilar entre 500 y 600 libras anuales; a las que –al parecer, más adelante– se añadieron las proporcionadas por la concesión de la explotación pesquera de la zona del almarjal (AMG: Capitular de 1598-99; Capitular de 1620). Con los ingresos procedentes de estas rentas debía hacer frente el consistorio a determinados salarios de poca monta asignados a los gestores municipales, a algunos gastos defensivos –de importe incierto y variable y, en su mayor

Pozo del Rey, 1901.



parte, asumidos por la Diputación de la Generalidad– y, sobre todo, a los acreedores que habían prestado su dinero para atender necesidades perentorias en circunstancias excepcionales, como eran las provocadas por hambrunas, pestes, inundaciones; o la propia adquisición del privilegio de villazgo, que generó en su momento un endeudamiento de 5.500 libras (ACA: CA: Leg. 864, doc. 38).

Tras la Guerra de Sucesión, y en aplicación de los decretos de Nueva Planta, en el verano de 1707, el modelo municipal quedó asimilado en todos los territorios de los reinos de Valencia y Aragón –y, más adelante, también de Cataluña y Mallorca– al vigente en Castilla. Durante la mencionada contienda, Guardamar se mostró siempre partidaria de Felipe V –a diferencia de otros municipios comarcanos de realengo, como Orihuela, Callosa y Almoradí, que manifestaron su fidelidad al Archiduque Carlos–; pero ello no la eximió de la abolición de su régimen municipal. El nuevo ayuntamiento de regidores, presidido por el Alcalde ordinario, sustituía a la antigua corporación de justicia y jurados; al tiempo que el procedimiento de la insaculación daba paso al nombramiento anual de los nuevos munícipes por el Capitán General y la Audiencia de Valencia, a propuesta de la corporación saliente. Algunos oficios del extinto organigrama municipal, como el sobrecequero, pudieron preservar momentáneamente su protagonismo de antaño, y aunque a partir de 1712 la jurisdicción de aguas en toda la huerta del Bajo Segura fue asumida por el Alcalde Mayor de Orihuela, la resistencia ofrecida por los nuevos ayuntamientos a esta sujeción derivó en una paulatina recuperación de las competencias perdidas; que, en el caso concreto de Guardamar, se produjo a partir de 1740 (Bernabé, 2004; ARV: Real Acuerdo).

Los cambios que la nueva dinastía borbónica fue introduciendo en el modelo institucional apenas afectaron, sin embargo, a la composición familiar de los componentes del nuevo consistorio, que continuaron siendo reclutados en su mayoría –al menos en un primer momento, como revelan las actas municipales– de entre los candidatos que habían engrosado la ya desaparecida bolsa de la insaculación. Finalmente, también la hacienda municipal acabaría siendo objeto de algunos retoques, al tener que atender nuevas obligaciones, mientras que la introducción de algunos nuevos impuestos reales temporales –como los cuarteles– o ya definitivos, como el equivalente, supusieron un mayor esfuerzo fiscal para el vecindario. Con la recuperación demográfica y agraria, es muy posible, no obstante, que las cuentas municipales se fueran saneando paulatinamente. Hacia 1735 el balance era claramente positivo, pues para atender unos gastos de 811 libras anuales, los ingresos ascendían por entonces a 1.564 (Camarena, 1966). Claro que datos aislados de esta naturaleza no retratan toda una centuria. Nuevas investigaciones habrán de contribuir en un futuro a un mejor conocimiento de la época en su conjunto, algunas de cuyas líneas maestras aquí solo se ha tratado de esbozar.